



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010035685 DEL 13/08/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 20 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014 la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013.

a) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante el oficio No. SSPD 20144010287271, del 29 de mayo de 2014, enviado por correo certificado el 5 de junio de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, el señor Cristóbal Sierra Sierra, en su calidad de alcalde del municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 4420145290341352, del 27 de junio de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014.

Así mismo, esta entidad pudo concluir una vez revisadas las actuaciones que cursan dentro del presente asunto, que la Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, fue notificada por conducta concluyente conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del C.P.A.C.A.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del C.P.A.C.A., establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290341352, del 27 de junio de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

1. DE LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN SIN RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.

1.1. DEL CARÁCTER SANCIONATORIO EN LA DECISIÓN ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN SSPD-20144010017965 del 29/05/14.

En primer término debemos advertir que la decisión adoptada por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se constituye en una verdadera sanción para nuestro municipio; toda vez que se nos está DESCERTIFICANDO en la administración de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico, prohibiendo la adquisición de nuevos compromisos con cargo a los mismos. Bajo este

sentido con la anterior decisión se limita la facultad constitucional de las entidades territoriales de administrar sus recursos en forma autónoma e independiente.

1.2. DEL DEBIDO PROCESO EN TODA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

Es de público conocimiento, que es deber constitucional de la Administración Pública, observar el debido proceso en todas sus actuaciones administrativas, en aplicación de los derechos fundamentales inherentes al Estado Social de Derecho.

Así lo prescribe el artículo 29 de la Constitución Política, y así lo ha definido la Corte Constitucional en forma reiterada al fijar los alcances de este deber impuesto por el Constituyente en la Sentencia T-467 oct. 18 de 1995. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.:

"El debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos de ley. El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas procurando, en todo momento, el respeto a las formas propias de cada juicio.

"El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente "para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas."

"Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

"(...) En lo que se refiere a las actuaciones administrativas, éstas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso, los términos y etapas procesales descritas.

"Sobre el particular, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo señala lo siguiente:

"Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria."(...).

"Así el debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija a las autoridades públicas, sino también a los particulares, en forma tal que éstos últimos también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los benefician y desconocer o ignorar aquellos que les sean favorables".

Con la anterior referencia jurisprudencial, queremos resaltar que la aplicación del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la administración, se constituye en un derecho del investigado frente a cualquier actuación administrativa que pretenda concluir con la imposición de una sanción.

1.3. LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ART. 29 DE LA C.N., VICIA DE NULIDAD EL ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO CON OMISIÓN DE PROCEDIMIENTO QUE IMPONE EL DEBIDO PROCESO.

Por ultimo queremos hacer referencia que el atentado y violación del principio constitucional de debido proceso, vicia de nulidad absoluta el acto administrativo proferido con omisión de las formas y procedimientos que impone el debido proceso, aun cuando su contenido sea ajustado a derecho.

En este sentido, reiteradamente se ha pronunciado el Consejo de Estado así:

"2. El debido proceso en las actuaciones administrativas.

"Antes de que el artículo 29 de la Constitución proclamara contundentemente que el debido proceso es una garantía exigible en toda actuación administrativa, ya la Ley 58 de 1982 y el Código de lo Contencioso Administrativo, naturalmente en armonía con la Carta de 1886, habían diseñado y prescrito normas en favor de ese derecho fundamental.

"Por igual, la jurisprudencia y la doctrina, han pugnado siempre por el reconocimiento y la cabal aplicación de las normas más destacadas de lo que se entiende por debido proceso en toda actividad jurídica de la administración dirigida a afectar a los particulares.

"Nadie duda de que el derecho de defensa, que incluye el de audiencia previa a la decisión, es parte sustancial del debido proceso, tanto que si no existe la posibilidad de que el virtual afectado con medidas administrativas concretas y particulares, pueda ser oído y de contradecir las pruebas en contra, no puede existir un real debido proceso.

"El artículo 5° de la Ley 58 de 1982 prescribió como regla general que a . "falta de procedimiento especial las actuaciones administrativas de nivel nacional se cumplirán conforme a los siguientes principios:

audiencia de las partes;...

El Código de lo Contencioso Administrativo, que también funge como norma supletiva a falta de procedimiento especial, ordena adelantar las actuaciones administrativas conforme con el principio de contradicción, (art. 3° C.C.A.) al paso que el artículo 35 de ese Código, complementa y desarrolla el principio ordenando que las decisiones se tomen "habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones..."

"Por su parte, el artículo 84 del C.C.A., eleva a la categoría de causal autónoma de nulidad de los actos administrativos el hecho de que se hayan expedido "con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa...", con lo cual se evidencia la fuerte protección que el orden jurídico del país le ha dado a ese derecho.

"Si todo ello es así, la administración entonces no puede sostener válidamente, como lo hizo, que como sus resoluciones internas no contemplaban audiencia alguna, ni aviso previo a la decisión, sino apenas un mero concepto a otro órgano, el debido proceso se cumplió.

Tal es el planteamiento que se aduce en el sub judice por parte de la demandada, el cual, por su puesto, carece de fuerza alguna de convicción

"La Sala debe advertir que siendo el derecho de defensa parte sustancial del debido proceso, y el derecho a la audiencia previa, inherente a la esencia de tales derechos fundamentales, todas las veces que el reglamento no sea explícito en reconocer esas garantías, la administración está en el deber de acudir al C.C.A., para llenar el vacío y, en todo caso, otorgarle al interesado la oportunidad de expresar su opinión, antes, naturalmente, de decidir. Los recursos por vía gubernativa no suplen esa exigencia, porque se trata de otra fase de la actuación, en la que se discute la decisión con quien haya participado en el procedimiento de formación de la misma" (negrilla y resaltado fuera texto)

De la anterior jurisprudencia, nos es fácil concluir que el derecho de defensa, incluye el derecho de audiencia previa a la decisión, es decir que le otorgue al investigado la oportunidad de ser escuchado y rendir descargos y que su inobservancia se constituya en causal absoluta de nulidad.

1.4. DE LA APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO.

A efectos de determinar el procedimiento específico que debe adelantar la Superintendencia para adelantar los procesos administrativos de certificación y descertificación, haremos alusión a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 1040 de 2012, el cual dispone a la letra lo siguiente:

"... Los resultados del proceso de certificación anual serán expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año, aplicando las normas del Código Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos...." (negrilla y resaltado fuera texto)

Por su parte el artículo 34 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, indica que las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en la mencionada ley, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales y en lo no previsto en dichas leyes especiales se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo.

Así las cosas, si partimos del concepto que fue el mismo Decreto 1040 de 2012, que estableció que en los procesos de certificación se deben aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo en lo que se refiere a las actuaciones administrativas, notificaciones, pruebas y recursos, de contera debemos concluir a prima facie que dicho proceso -entiéndase certificación o descertificación- no se encuentra regulado por ley o procedimiento especial.

Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo, establece como procedimiento administrativo común a los diferentes procedimientos administrativos, entre otros las siguientes: a) Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. Inciso segundo artículo 35 ley 1437 de 2011. b) Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella. Inciso tercero artículo 35 ley 1437 de 2011. c) Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Inciso primero artículo 37 ley 1437 de 2011.

Si partimos del hecho inocultable que la Superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo debe aplicar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, por lo tanto debió comunicar al Municipio el inicio de la investigación administrativa, debió citar a descargos al representante legal del Municipio y debió otorgarle la oportunidad de aportar y controvertir las pruebas existentes en el expediente.

Para nuestro caso en específico tenemos, que la Superintendencia inicia y concluye un procedimiento administrativo claramente sancionatorio con la simple expedición de la Resolución No. SSPD-20144010017965 DEL 29/05/2014, es decir, en nuestra calidad de investigado nunca tuvimos¹ conocimiento del inicio del procedimiento administrativo, no fuimos citados a rendir descargos y por lo tanto nunca fuimos escuchados en descargos, ni mucho menos se nos otorgó la posibilidad de aportar pruebas, ni controvertir las existentes.

Como se hizo alusión en párrafos anteriores, la omisión de tan elementales procedimientos inherentes al derecho del debido proceso, vician de nulidad absoluta la Resolución No. SSPD-20144010017965 DEL 29/05/2014.

En consecuencia y mediante el presente escrito me permito solicitar la nulidad absoluta de todo lo actuado por violación directa del derecho fundamental del debido proceso.

2. DE LA POTESTAD PREVENTIVA Y SANCIONADORA DEL ESTADO.

Otro aspecto al cual queremos referencia, es la diferencia que existe entre la potestad sancionatoria administrativa y la potestad sancionatorio penal, toda vez que se contraponen el carácter eminentemente preventivo de la primera por oposición a la naturaleza esencialmente correctiva de la segunda. En opinión de la doctrina¹, la función sancionatoria de la administración "tiene significativo carácter preventivo, constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas".

Entonces, el ejercicio adecuado de la función preventiva, se constituye en un pre requisito esencial del ejercicio de la función sancionatoria, la cual debe constituirse esta última en subsidiaria de la funciones de control.

1

J A I M E OSSA ARBELÁEZ, "Derecho Administrativo Sancionador". Pág.583. Legis, Iera. Edic. 2000.-GUSTAVO H. RODRÍGUEZ, Derecho Administrativo Disciplinario Ed. Librería del profesional. 1.985, pág. 20.

Es la función de control y vigilancia y no otra, la que la Constitución y la ley les atribuye a las superintendencias, con el único fin de demostrar la presencia del Estado en el desarrollo del servicio, a fin de preservar, proteger y garantizar el derecho del usuario.

No pretendo tampoco desconocer la facultad sancionadora de las Superintendencias, pero la misma debe ser el ejercicio subsidiario del control preventivo, dentro de un proceso claro de graduación y dosimetría en la imposición de la sanción y desarrollado dentro del marco normativo sancionatorio, respetando los derechos fundamentales del debido proceso, de defensa y de audiencia.

3. DEL CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE

Por último, y en el remoto evento que la Superintendencia no acepte la solicitud de nulidad impetrada, debemos indicar que el Municipio mediante acto administrativo No. 55 del Junio 26 de 2013, implementó y aplicó las metodologías tarifarias expedidas por la CRA y otra situación muy diferente es que existió una amplia serias inconsistencias en la aplicación del Decreto 1639 de 2013, como lo explico a continuación: Según el artículo 53 de la ley 142 de 1994 Corresponde a la Superintendencia de servicios públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer los sistemas de información que debe organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable.

El artículo adicionado por el artículo 14 de la ley 689 de 2001. Corresponde a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a control, inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la ley 142 de 1994.

Lo anterior infiere que dentro de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, se encuentra la de administrar un sistema de información, quiere decir esto, que la superintendencia debe habilitar los formatos ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO para la vigencia 2013 y que de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. SSPD -20101300048765 DEL 14- 12- 2010 es de periodicidad EVENTUAL – por lo que La información debe reportarse cada vez que la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, y con lo cual se cumpliría con el decreto 1639 de 31 de julio 2013 en su artículo 5 "criterios adicionales para entidades territoriales prestadoras directas de categorías 4, 5 y 6, Reporte al SUI de formato acto de aprobación de tarifas expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

Por lo tanto, los fundamentos que dieron origen a la expedición irregular de la Resolución No. SSPD-20144010017965 del 29/05/14 ya no existen; por lo tanto en aplicación del principio de congruencia la entidad debe tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse la investigación, ocurrido después de haberse iniciado el proceso, siempre que aparezca probado y en consecuencia se debe revocar el referido acto administrativo".

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290341352, del 27 de junio de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se anexó la siguiente prueba:

- Copia del Decreto No. 055, del 26 de junio de 2013, por medio del cual se aprobaron las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

El anterior documento, en su valor integral, se anexa al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

Analizado el recurso de reposición que aquí se decide, el alegato del representante del ente municipal se puede resumir en que en su concepto, esta SSPD, con la expedición de la Resolución No. 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, vulneró el derecho al debido proceso, porque el procedimiento adelantado fue sancionatorio, no se le comunicó el inicio de la investigación, ni se le citó a descargos, no pudo además aportar pruebas ni controvertirlas, y por consiguiente debe decretarse la nulidad del acto acatado.

Respecto de los argumentos expuestos por el impugnante, este ente de control debe señalar lo siguiente:

Frente a la violación al debido proceso y el requisito incumplido:

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Ahora bien, teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional al pronunciarse frente a este tema, señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad".*²

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en Sentencia T-2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en el señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de QUIPILE, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber.

Esta entidad, con oficio SSPD 20134010145461, del 27 de marzo de 2013, informó al alcalde de QUIPILE las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas y SGP-APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008, es decir, al municipio se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en el SGP-APBS, vigencia 2012.

² Corte Constitucional. Sentencia C-610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado, para tal efecto y con el fin de dar respuesta a los argumentos presentados por el ente municipal con su recurso, considera oportuno este despacho hacer alusión al análisis que realizó esta entidad en el acto atacado, para demostrar que no se vulneró el debido proceso del municipio de QUIPILE por parte de este ente de control.

[illegible][illegible][illegible]

1. THE UNITED STATES OF AMERICA IS A PARTY TO THE TREATY OF AMSTERDAM, OF 1948, WHICH IS IN FULL FORCE AND EFFECT.

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1970

$$\begin{aligned}
 \text{loglik} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{1}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i \right)^2 \right) \right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(-\log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \left(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i \right)^2 \right) \\
 &= -\log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i \right)^2
 \end{aligned}$$

CONCLUSIONS

1. The first part of the report, which is the most important, is the description of the situation in the country. This part is divided into two main sections: the first section describes the situation in the country as a whole, and the second section describes the situation in the various regions of the country. The first section is divided into three parts: the first part describes the situation in the country as a whole, the second part describes the situation in the various regions of the country, and the third part describes the situation in the various districts of the country. The second section is divided into two parts: the first part describes the situation in the various regions of the country, and the second part describes the situation in the various districts of the country.

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

definiendo el tipo de campo y las Categorías y valores para el diccionario Numérico de Ruptura, así:

[illegible]

and $\alpha = 1$ is the $\Gamma(1, 1)$ distribution. In this case, the probability density function of the $\Gamma(1, 1)$ distribution is $f(x) = e^{-x}$ for $x \geq 0$ and $f(x) = 0$ for $x < 0$.

ACUERDO N° 010
 Agosto 30 de 2003.

POR MEDIO DEL CUAL SE RECLAMENTA EL INCREMENTO ANUAL DEL VALOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA, Y SE DAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 313 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, EL ARTICULO 32 NUMERAL 7 DE LA LEY 136 DE 1994, EL ARTICULO 189 DEL DECRETO LEY 1333 DE 1988 Y

CONSIDERANDO

- A. Que el Artículo 313 de la Constitución Nacional Otorga, Facultades al Honorable Concejo para adoptar de Conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales.
- B. Que el Artículo 32 Numeral 7 de la Ley 136 de 1994 como atribuciones del Concejo, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la Ley.
- C. Que el Artículo 189 en Concordancia con el Artículo 177 del Decreto 1333 de 1988 establece que los incrementos para los servicios públicos serán el porcentaje de índice de precios al consumidor determinado por el DANE para cada año.
- D. Que el Artículo 125 y 126 de la Ley 142 de 1994 establece la actualización de tarifas aplicando las variaciones en los índices de precios con vigencia de cinco (5) años.
- E. Que el Acuerdo N° 027 de Agosto 21 de 1992 establece unos incrementos anuales del 20% para conexión y consumo de Acueducto.

Puede observarse del reporte efectuado por el ente municipal en el SUI, se advierte que cargó los Acuerdos Municipales No. 027 de 1992 y No. 010 de 2003, expedidos por el Concejo Municipal de Quipile, mediante los cuales se establecieron las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

No obstante el cargue de los actos administrativos mencionados, esta entidad debe reiterar lo señalado en el acto atacado, en el sentido de recalcar que con fundamento en lo dispuesto en la Resolución No. 271 de 2003, expedida por la CRA, la entidad tarifaria local competente que puede definir las tarifas, tratándose de municipios prestadores directos, es el alcalde municipal o la junta de que trata el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, y no los concejos municipales, véase:

"Entidad tarifaria local. Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios.

De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:

- a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que hace referencia el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994;*
- b) La junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.*

En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y por lo tanto, no puede definir tarifas." (La subraya fuera del texto)

Y así lo ha señalado esta superintendencia mediante concepto SSPD-OJ-2006-462 de 2006, en el que indicó frente a este tema:

"1. Conforme al artículo 88 de la Ley 142 de 1994(2) las empresas de servicios públicos son las encargadas de fijar las tarifas de los servicios públicos que presten, dependiendo al régimen al que deban someterse.

Por otra parte, la Resolución CRA 271 de 2003(3) define en su artículo 1 que "En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y por lo tanto, no puede definir tarifas".

En conclusión, el Concejo municipal no puede intervenir para indicarle a una empresa que tarifas de cobrar". (Énfasis añadido).

Por lo anterior se concluye, que el Concejo Municipal **no es** autoridad tarifaria local, razón legal que impide a esta superintendencia acreditar este criterio con los actos administrativos que cargó el municipio de QUIPILE en el SUI, ya que fueron expedidos por dicho cuerpo colegiado; por consiguiente, no se cumple este requisito por el ente territorial.

Ahora, el acto administrativo de descertificación fue notificado al interesado de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición, recurso que aquí se decide.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

En consecuencia, al no encontrarse vulneración de norma alguna aplicable a la materia, el argumento del municipio NO está llamado a prosperar.

Frente al proceso SGP-APBS como sanción y la solicitud de nulidad.

De cara a las aseveraciones del recurrente, que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB es un procedimiento sancionatorio, esta SSPD reitera que, como quedó señalado en el numeral anterior, el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben a aplicar al presente proceso, de conformidad con el artículo 8º del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

Teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir unilateralmente actos administrativos particulares y generales; consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106 y 115, relacionados con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

Al respecto, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la SSPD tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma ley consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo expuesto, no son de recibo para esta entidad las afirmaciones realizadas por el impugnante en el sentido que "(...) debió citar a descargos al representante legal del Municipio y debió otorgarle la oportunidad de aportar y controvertir las pruebas existentes en el expediente. Para nuestro caso en específico tenemos, que la Superintendencia inicia y concluye un procedimiento administrativo claramente sancionatorio con la simple expedición de la Resolución No. SSPD-20144010017965 DEL 29/05/2014, es decir, en nuestra calidad de investigado nunca tuvimos¹ conocimiento del inicio del procedimiento administrativo, no fuimos citados a rendir descargos y por lo tanto nunca fuimos escuchados en descargos, ni mucho menos se nos otorgó la posibilidad de aportar pruebas, ni controvertir las existentes", toda vez que como se anotó en los párrafos precedentes, este procedimiento no es sancionatorio, y al ente municipal sí se le comunicó la apertura del proceso del SPG-APBS, 2012, y esta entidad no estaba en la obligación de citar a descargos al representante del municipio, por no estar inmerso tal procedimiento en los procesos de naturaleza sancionatoria como quedó visto.

De otra parte, respecto de las afirmaciones del recurrente encaminadas a cuestionar el hecho de no haber abierto un período probatorio dentro del presente proceso de certificación, esta entidad considera que el decreto de pruebas de oficio es discrecional, conforme lo señala el artículo 40 del C.P.A.C.A., ya que contempla la potestad de las autoridades públicas de decretar pruebas de oficio o a petición de parte dentro de las diferentes actuaciones administrativas, nótese: *"Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos."* Negrilla fuera de texto.

En estas condiciones, el no haberse decretado pruebas dentro de oficio de la presente actuación, se encuentra ajustado a lo reglamentado por las normas que regulan este procedimiento administrativo.

Frente a la aseveración de la habilitación de los formatos de acto de aprobación de tarifas para la vigencia 2013, se le indica al municipio que mediante resolución SSPD – 20101300048765, del 14 de diciembre de 2010, esta superintendencia expidió *"la Resolución Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema Único de Información - SUI de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035"*, y reglamentó entre otros aspectos, lo relacionado con el cargo de la información de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo al Sistema Único de Información(SUI).

Respecto del formato de acto de aprobación de tarifas, la Resolución señalada dispuso: *"FORMATO. ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS"*. El prestador deberá remitir a esta Superintendencia a través de la página Web www.sui.gov.co en formato pdf o tif, copia del acto por medio del cual la entidad tarifaria local adopta el estudio de costos y tarifas del servicio de alcantarillado, en caso que sea el mismo para los tres servicios, debe reportarlo igualmente en los servicios de acueducto y aseo. Los formatos antes mencionados, se encuentran señalados en los artículos 6.3.3.2., 7.3.3.2. y 8.3.3.5. del Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765; dicho reporte al SUI se debe realizar cada vez que la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, al día calendario siguiente a su expedición.

Ahora bien, atendiendo lo manifestado por el impugnante, es necesario aclarar que la habilitación de un formato o formulario para un período superior a la vigencia 2012, la cual tiene habilitada como se observa en la imagen siguiente, no es posible realizarla en el 2013, tal como se encuentra señalado en la Resolución 20101300048765, puesto que las solicitudes de habilitación se realizan respecto a vigencias anteriores. Lo anterior, debido a que el recurrente señala que esta entidad debía habilitar los formatos relacionados con el acto de aprobación de tarifas, para la vigencia 2013, los cuales se habilitan (siempre que no estuvieran habilitados y por solicitud del representante legal de la empresa) en el año siguiente. Lo anterior, por cuanto los cargues de periodicidad anual, son habilitados una vez culmine la vigencia respectiva, es decir los del 2013, se habilitan en enero de 2014.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

AÑO	IDENTIFICACION	NOMBRE ENTIDAD Y DIVISIÓN	SERVICIO	TOPICO	PERIODO	ESTADO	ACTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN
2005	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual		2008-07-15 09:44:06
2007	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual		2008-07-15 09:53:49
2008	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual		2010-12-14 05:51:19
2009	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual		2010-12-14 07:05:28
2009	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual	Pendiente	2010-01-30 00:00:00
2012	2985	OFICINA D 8999999431	ACUEDUC	Com			Pendiente	2013-12-31 00:00:00
2012	2985	OFICINA D 8999999431	ALCANTAR	Com			Pendiente	2013-12-31 00:00:00
2012	2985	OFICINA D 8999999431	ASEO	Com	ANUAL	Anual	Pendiente	2014-06-01 00:00:00

En conclusión, al haberse regido el proceso de certificación SPG-APBSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio como lo afirma el municipio, sin que sea viable decretar la nulidad por violación al debido proceso alegada por el recurrente, este argumento no prospera.

No obstante lo anterior, se observa que el ente territorial efectuó acciones tendientes para acreditar oportunamente este requisito; por lo tanto y partiendo de tales actuaciones, se considera procedente entrar a estudiar de fondo el acto administrativo aportado y determinar si cumple con los requerimientos exigidos para el presente caso.

Así las cosas, al analizar el Decreto 55, del 26 de junio de 2013, allegado con el recurso de reposición, se verificó que éste fue expedido por el alcalde como representante legal del municipio y autoridad tarifaria competente para proferir dicho acto administrativo; así mismo que la fecha de su expedición es anterior a la fecha máxima de cargue para el proceso SGP-APBS, vigencia 2012, y que en dicho acto se establecieron las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio, así:

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPILE
DECRETO 055 de 2013
(JULIO 26 DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas por la ley 142 de 1994 y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de QUIPILE Cundinamarca es prestador directo de los servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y que por tanto es competencia del Alcalde, asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Que para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio, es necesario establecer las tarifas de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo según los costos en que se incurre en la prestación de estos servicios.

Que el Municipio permite a los mecanismos de participación ciudadana su intervención en la gestión de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y Aseo, según Ley 142 de 1994.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO. Fijar las tarifas mensuales del servicio de acueducto en el Municipio de Quipile, las cuales podrán ser indexadas por índices de Precios al Consumidor - IPC, cada vez que se acumule una variación de por lo menos un tres por ciento (3%), de conformidad con lo establecido en el Artículo 125 de la ley 142 de 1994.

USUARIO	ESTRATIFICACION	CARGO DE PAGO	SEMIANUAL	ANUAL	SEMIANUAL	ANUAL
PRESTACIONARIO	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	5	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	8	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ARTICULO SEGUNDO. - TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO. Fijar las tarifas mensuales del servicio de Alcantarillado en el Municipio de Quipile, las cuales podrán ser indexadas por índices de Precios al Consumidor - IPC, cada vez que se acumule una variación de por lo menos un tres por ciento (3%), de conformidad con lo establecido en el Artículo 125 de la ley 142 de 1994.

USUARIO	ESTRATIFICACION	CARGO DE PAGO	SEMIANUAL	ANUAL	SEMIANUAL	ANUAL
PRESTACIONARIO	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	5	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	8	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRESTACIONARIO	10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ARTICULO TERCERO. - TARIFAS SERVICIO DE ASEO. Fijar las tarifas mensuales del servicio de Aseo en el Municipio de Quipile, las cuales podrán ser indexadas por índices de Precios al Consumidor - IPC, cada vez que se acumule una variación de por lo menos un tres por ciento (3%), de conformidad con lo establecido en el Artículo 125 de la ley 142 de 1994.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

CODIGO CUCA DE USO	TBL (1/SUSCRIPTO N)	TBT (1/SUSCRIPTO N)	TE (1/SUSCRIPTO N)	TOT (1/SUSCRIPTO N)	TPH (1/SUSCRIPTO N)	TARIFA CON SUBSIDIO Y CONTRIBUCION MES 11 (1/SUSCRIPTO N)
1	1450.2	277.85	277.85	370.35	105.10	1450.25
2	2444.46	153.69	153.69	257.59	210.40	2444.50
3	222.25	127.82	127.82	107.29	59.25	222.25
4	196.77	150.42	150.42	120.29	66.45	196.75
5	245.15	224.17	224.17	217.51	113.00	245.15
6	76.03	104.54	104.54	25.14	131.84	76.03
7	645.80	1694.26	1694.26	3251.25	1632.02	645.80
8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
37	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
41	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
46	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
47	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
52	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
59	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
66	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
69	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
83	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ARTICULO CUARTO. - El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

PUBLIQUESE Y CÚPLASE

Expedido en Quipile Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de Julio de 2013.

CRISTÓBAL SIERRA SIERRA
Alcalde Municipio de Quipile Cundinamarca

En conclusión, se evidencia que el ente territorial acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Cristóbal Sierra Sierra, como alcalde municipal de QUIPILE, prospera y en consecuencia la resolución recurrida se revoca.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la Resolución No. SSPD 20144010017965, del 29 de mayo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR al municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de QUIPILE, del departamento de CUNDINAMARCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de CUNDINAMARCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá, D. C.

JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Martha Lucia Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094012716080463A